

Enrique del Olmo

Más allá de los balcones

Irispress Magazine, 31 de marzo de 2020.

“Se ha pasado de un mundo de opulencia plagado de certezas a un mundo en que el tiempo cobra una dimensión inesperada”

Manuel Rico

Resulta difícil escribir un artículo sobre la crisis del COVID 19 por la multitud de aspectos, de enfoques, de problemas a los que nos vemos abocados al intentar esbozar una respuesta. A la inmensa mayoría de ellos, en una cura necesaria de humildad, debemos asumir que no podremos, es por eso que, asumiendo el riesgo, mi opinión, visión o sensibilidad no puede ser más que fragmentaria.

En relación al momento actual: **el pico de la crisis sanitaria**, no puede haber más respuesta que una: poner todos los recursos existentes (económicos, científicos, personales, institucionales, materiales e inmateriales) para **taponar la hemorragia fortaleciendo la solidaridad social**.

A veces, es difícil formular políticas en positivo, pero sí puede ser muy útil, socialmente, el desglosar algunas **recomendaciones profilácticas** que mejorarían sustancialmente la respuesta social:

– **Huir de los debates sobre soluciones mágicas** (estas, aunque no mágicas, son objeto del trabajo incesante de la comunidad científica a nivel internacional y nacional) que tanto nos inundan.

– **Huir de la pontificación de lo correcto, o del «ya lo había dicho yo»**, donde la inmensa mayoría no había dicho nada o, aún más, había dicho lo contrario. Creo que una actitud de este tipo sería muy buena para la lucha que hoy se está dando y también para la salud mental colectiva.

– **Huir de la conversión de errores, imprevisiones o dificultades en bandera de desconfianza** hacia los responsables de la intervención pública (porque son ellos los que tienen los recursos económicos, competenciales y humanos) en la crisis sanitaria y humanitaria.

– **Huir de la tendencia a convertir un hecho o hechos puntuales en la afirmación de comportamientos generales**. Tomar la parte por el todo. Los hechos claramente condenables que se producen en una crisis global como esta no pueden ser convertidos en lo general.

Se producen estafas y engaños, seguro; se producen incumplimientos manifiestos de las condiciones del aislamiento, sin duda; se aprovecha la situación para ver cómo se pueden obtener ventajas actuales o posteriores, evidente. Pero lo que es extremadamente peligroso es articular el mensaje de que somos una sociedad de ladrones, insolidarios y aprovechados, esencialmente, porque la realidad nos muestra todos los días palmariamente que no es así, sino que prima lo solidario y lo común.

- Huir y enfrentar el uso de la situación para banderías políticas envueltas en patriotismo.

La verdad es que uno se asombra de las declaraciones de tantos voceros (formales, comunicativos e informales) de la derecha que afirman su lealtad con el Gobierno y con la lucha colectiva contra el virus, para inmediatamente después de haber cubierto el expediente, dedicar el 90% de las apariciones públicas a criticar y denostar al Gobierno (mostrando cada vez con menos pudor que su objetivo central es que el mismo se hunda, inoculando odio en la sociedad de forma activa).

¿Significa esto que debemos ser una sociedad uniformemente militarizada sin posiciones críticas, sin propuestas? En absoluto. **Todo lo contrario, si algo nos muestra el momento actual, es la inmensa creatividad solidaria que surge de toda la sociedad**, desde los aplausos en los balcones y en los hospitales, a las iniciativas productivas (empresas que transforman sus propias producciones para responder al reto), pasando por las redes de apoyo espontáneas y personales que florecen desde todos los rincones del planeta.

Toda iniciativa, toda propuesta, todo malestar, toda crítica razonable debe ser contemplada y atendida en la medida de lo posible. Y la sensibilidad de los poderes públicos ante ello es una condición de éxito y avance.

En una crisis, los roces, las pugnas, al igual que los errores son lógicos. El problema en sí es la norma, y estoy convencido de que no. Se necesitan apoyos y empatía como cuestiones básicas, como se muestra con las innumerables iniciativas y propuestas que se hacen por centenares desde la sociedad civil.

Una discusión permanente es si se ha llegado tarde a ver la dimensión de la pandemia y si, por ende (con el añadido de consideraciones de tipo económico y social), las medidas más drásticas se tomaron con retraso.

Es cierto que algunos “alarmistas positivos” (con este término quiero reseñar que el objetivo no era la crítica, sino la prevención), como Juan Ignacio Crespo y Miguel Sebastián, venían señalándolo desde hace varias semanas, a raíz del confinamiento de Wuhan.

Es un tema ante el que no hay que esconderse y no buscar citas y declaraciones para mostrar, desde otros objetivos (el desgaste del gobierno), quién tenía razón, cuando, obviamente, nadie (tanto gobiernos como entidades transnacionales) tenía claridad sobre el desarrollo de la pandemia.

Ante una situación como la que vivimos, de unas dimensiones e impactos desconocidos, una estrategia NO puede ser más que una línea de conducta (cierres, no cierres, confinamiento fuerte o débil, fortalecimiento de infraestructuras, incremento y protección de los recursos humanos, atención a los sectores más frágiles, uso de todas las facultades constitucionales, cooperación institucional e internacional, responsabilidad individual...).

Esta línea de conducta está sujeta a **aproximaciones sucesivas** basadas en cuatro factores:

- a) Los informes científicos.
- b) La evolución cierta y la prospectiva.
- c) La imprescindible dotación de recursos humanos y materiales.
- d) Las estrategias pormenorizadas en los cuellos de botella y la localización territorial.

Siendo además plenamente conscientes de que en una sociedad compleja y con intereses diversos, lo que es bueno para unos, sea considerado lesivo por otros. Por ejemplo, asistimos de forma recurrente a demandar una medida: un cierre total de la actividad productiva (diversas fuerzas políticas y CCAA) y, cuando se toma, otros sectores consideran que es “precipitada”, como han hecho el día 30 de marzo otras CCAA y la CEOE.

Así, la rectificación y acople de medidas es una acción inevitable, porque no existe posibilidad de un diseño de gabinete para abordar una crisis como la actual. En resumen, lo mejor es dirigir todo el esfuerzo en una misma dirección y volcar el apoyo a quien tiene la responsabilidad de enfrentar la crisis, situando la necesaria crítica en el sentido de mejora y trabajando en la gestación de redes de solidaridad cívica.

¿Y EL FUTURO...?

Esta necesidad perentoria no nos impide —al contrario, nos exige— señalar algunos rasgos significativos del futuro próximo. Una afirmación recurrente es que no sabemos cómo será el mundo después de esto, de la misma forma que en la crisis del 2008 se hablaba de «refundar el capitalismo» (Sarkozy) o “suspendamos un tiempo la economía de mercado” (Díaz Ferrán, hoy preso y expresidente de la CEOE).

Las hipótesis son múltiples: capitalismo del desastre (*La doctrina del shock* de Naomi Klein), sociedades más cerradas, desglobalización, mayor polarización de intereses, valores y razones en conflicto, mayor vulnerabilidad, mayor división entre países pobre y países ricos...

Las necesidades de cambio se muestran como perentorias. La crisis del clima ya lo había preanunciado, pero ha sido un virus inesperado el que lo ha puesto sobre la mesa con urgencia. Algunos tótems han caído, por el momento, producto de la propagación del virus, como la disciplina presupuestaria de la Unión Europea y la demonización del gasto público.

Como señala Manuel Rico, en un magnífico artículo titulado “**De la sociedad de la opulencia al borde del (corona) abismo, un aprendizaje**”, «un mundo desconocido en el que gran parte de los paradigmas y seguridades que habíamos construido

comienzan a agrietarse. Y se agrieta, ante todo, el principio que, desde presupuestos ultraliberales, ha venido a traducirse en el “sálvese quien pueda”. Todos miran a los estados, a las estructuras de poder público, a los recursos económicos y humanos de que disponen las administraciones. Lo que hasta hacía solo unas semanas era el gran enemigo de la libre iniciativa y de la libertad se convierte en el “gran protector”. No solo lo reconoce así la inmensa mayoría de los ciudadanos, sino que lo empiezan a reconocer empresarios grandes, pequeños y medianos y, con la boca pequeña, los partidos políticos que sustentaron sus políticas de “saneamiento” en el recorte de servicios públicos, especialmente la sanidad y la enseñanza, pero también en la cultura».

Es evidente, aunque sea doloroso, que sectores muy poderosos van a aprovecharse de la situación, no van a parar aunque el reguero de muertes se amplíe en sacar partido y beneficio, como así fue en la crisis del 2008, donde, después de las lágrimas de cocodrilo, salimos con un mundo más desigual y vulnerable.

Durante las caídas de la bolsa de estos días, las operaciones bajistas, como el *hedge fund* de Ray Dalio, Brightwater (160.000 millones) ha operado sobre la bolsa española con 1.100 millones para obtener pingües y rápidos beneficios, y, a la vez, en un ejercicio de cinismo, es capaz de afirmar que *“Estamos en un momento de fragmentación social, un periodo similar al del periodo 35/45. Donde hay un conflicto entre ricos y pobres que es causa del populismo (sic)”*.

O, por otra parte, la escandalosa petición de Jeff Bezos, dueño de Amazon y con una fortuna personal de 100.000 millones de dólares, de crear un fondo (de 25 millones de dólares) a través de donaciones externas para ayudar a ¡¡¡los empleados de Amazon!!! Igual que en el 2008, pero, ahora, de manera más profunda, pues, en este caso, estamos ante una crisis con cientos de miles de enfermos y millares de muertos en menos de tres meses, y que alcanza de forma casi homogénea a decenas de países de todos los hemisferios, donde toda la humanidad con mayor o menor intensidad siente el peligro y el miedo, **tanto los ricos como los pobres buscan refugio en el Estado.**

Aparece una conciencia generalizada de que **del Estado** (mas allá de sus formas democráticas o autoritarias) **y de su capacidad de acción** depende evitar una catástrofe, no sólo sanitaria, sino también económica y podría ser de derechos y libertades.

Para los sectores privilegiados, es una nueva ocasión para que el Estado les vuelva a salvar de la crisis no sólo con bajo coste, sino posiblemente con nuevos beneficios, como mostró la crisis del 2008 con la acumulación de riqueza en el vértice de la pirámide social. Uno de los elementos que debemos retener, sin duda, es que hay países y grandes empresas que no están interesados en que las cosas cambien, como muestran una y otra vez ante los grandes temas que afectan al futuro de la especie, como la crisis ambiental y la defensa del planeta (para dudas, recordemos los “resultados” de la COP25 y la vigencia de la cumbre de París).

Para la mayoría de la población, para los “perdedores” de la crisis del 2008, y de tantas otras personas, esta conciencia de que el Estado puede cambiar el terreno de juego y el reparto de la riqueza hace que se vaya a exigir al mismo un papel, no sólo de salvador en estos momentos, sino también de reconstrucción de un Estado social o benefactor, que se ha ido agrietando y disolviendo ante el empuje de las políticas privatizadoras y de redistribución de las renta hacia las capas más altas de la sociedad.

Esa tesitura ya está planteada en el manejo mismo de la crisis, una parte sustancial del empresariado y sus defensores políticos defiende una receta mortal para la igualdad y la convivencia: todo el gasto de la crisis cubierto por el Estado, libertad de despidos, no pago de impuestos, exoneración de cuotas a la seguridad social y, después, de nuevo, la vieja receta del thatcherismo: bajada de impuestos y privatización de los bienes públicos.

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles para imponer el viejo orden. La mayor parte de los lazos de solidaridad tejidos en estos días, se han articulado alrededor de la intervención de las instituciones públicas: Gobierno, CCAA, Ayuntamientos, Administración Pública, FFAA, Fuerzas de Seguridad... Son estas instituciones las que facilitan, además, incardinar y tejer las redes de solidaridad civil y ciudadana que, en muchos casos, van por delante y permiten no sólo señalar los problemas, sino también, facilitar las soluciones señalando las ineficacias, errores y excesos que una acción del Estado tan potente llega a tener.

Por eso, cuando se dice que al virus se le combate unido, se refleja una enorme verdad social, aunque, mientras, algunos trabajen solo para sus intereses que tarde o temprano chocaran con la exigencia de la sociedad.

A lo largo de la crisis, se ha abusado mucho del lenguaje de guerra o de los paralelismos con los conflictos bélicos. Es una imagen sencilla que todo el mundo reconoce, aunque las diferencias sean abismales, sin embargo, hay un paralelismo mucho más interesante, que es cómo actuar en la posguerra. Cómo será el «paisaje para después de la batalla», como denominaba Juan Goytisolo la disección de la sociedad preexistente y a la que queremos llegar.

Manuel Castells, hoy Ministro de Universidades, señalaba algunas cuestiones de interés al paralelizar con la economía de posguerra (sí, la del Plan Marshall de la que nos hablan Pedro Sánchez e Íñigo Errejón, pero que requirió más del 5% del PIB) y, a día de hoy, esto significa una agenda que incluye temas que pondrán los pelos de punta a los que quieren que luego todo siga igual:

- Gasto público, motor de la recuperación y de la reconstrucción social, generación de empleo de calidad y valor añadido.
- Reforma del Estado para ganar no sólo en eficacia, sino también en músculo para la acción colectiva.

- Inversión, empleo y productividad vinculada a la revolución tecnológica. En pocos días, el concepto de trabajo presencial ha cambiado de forma sustancial.
- Desarrollo de modelos no consumistas que conduzca a la transición ecológica y cultural que tanto proclamamos. También nuestros aislamientos en estos días de estado de alarma nos han enseñado algo sobre las necesidades de consumo y las posibilidades de satisfacción de los humanos más allá del gasto compulsivo.
- Reconstrucción del Estado del Bienestar, no sólo como derechos de ciudadanía, sino también como motor económico. Estado del bienestar fuente de productividad, de riqueza y de empleo.
- Servicios básicos no sólo motor de inversión, sino también de demanda.
- Regulación impositiva que no se centre solo en personas y empresas, sino también en un mercado de capitales que ha perdido su valor productivo para desarrollarse como valor virtual y crecientemente inestable, como se muestra todos los días.
- Gravar, de una vez, las grandes bolsas de capital que no tributan y acometer el cierre de los paraísos fiscales que se dejó olvidado en algún G20 de 2009.

Estos aspectos y muchos otros que se están desarrollando configuran una apuesta por una reconstrucción social y del Estado basada en los bienes públicos, el equilibrio social, el respeto a la naturaleza, la cooperación y la solidaridad entre los humanos. Pero bajemos de la esfera de lo general o de los diseños de futuro para abordar temas concretos y lacerantes, que a lo largo de los últimos 15 años nos ha conducido a un deterioro de las condiciones de vida de sectores de la población y que, hoy, se ha mostrado como una descarnada y vergonzosa realidad para nuestra sociedad. Podríamos tomar muchos más ejemplos como la privatización de la sanidad y la enseñanza, pero voy a centrarme en un tema que nos llena de dolor, pero que, a la vez, se sitúa como una tarea de primer orden para la reconstrucción del Estado del bienestar de la que se habla: **las residencias de mayores.**

Bajo el Gobierno de Zapatero, el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, avanzó el desarrollo del cuarto pilar del Estado del bienestar: la Ley de Dependencia, que ha pasado más de 10 ejercicios presupuestarios sin casi financiación.

Hoy, nos encontramos con una realidad brutal que nos muestra un magnífico trabajo de CTXT llamado **“Aparcamiento de ancianos S.A.”**

Al menos 1.500 ancianas y ancianos fallecidos –el 37% del total de los muertos por coronavirus– en España. Cadáveres abandonados durante horas o días. Personal (religioso, sanitario y auxiliar) dándose a la fuga o confinándose con los enfermos para cuidarlos. Trabajadoras muy precarizadas –un 90% del total son mujeres–, sin medios ni formación para abordar el problema. Responsables empresariales y regionales mirando hacia otro lado. El Gobierno, desbordado y obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo...

La situación que se vive desde hace semanas en los centros de mayores por los contagios del Covid-19 es una tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero, **lo peor es que es un drama no del todo imprevisto.**

Los problemas se empezaron a gestar hace 15 años y se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora. Muchas residencias para mayores poco tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Son más bien, aparcamientos de abuelos gestionados con espíritu de eficiencia mercantil, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados y su principal característica es la precariedad.

Multinacionales y fondos buitres controlan el 75% de las plazas en centros de la tercera edad. El negocio mueve al menos 4.500 millones de euros anuales. Las CCAA, esencialmente, al ser esta su competencia, en estos años no han apostado por la inversión en una red pública de residencias, con infraestructuras adecuadas, con profesionales en todas las esferas de atención a la tercera edad igual que en las instalaciones sanitarias públicas, con servicios de apoyo a las familias.

Las residencias han ido floreciendo como setas ante una demanda creciente por el envejecimiento de la población y la imposibilidad de las familias, tanto económica como profesional, para atender a sus mayores. La atención a los mayores es una de las grandes piedras de toque del carácter solidario de una sociedad, como dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010/C83/02): *“Las personas mayores tiene derecho a una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”*.

Este derecho ha sido convertido por las políticas liberales en su opuesto: un aparcamiento de ancianos, una forma de succión de rentas de los pensionistas y un deterioro de las condiciones físicas, psíquicas y sociales de nuestros mayores. Las residencias son un nicho de negocio a la que las administraciones no sólo no han puesto coto, sino que las han convertido en un depósito de ancianos.

Obviamente, la casuística es muy amplia y existen, sin dudas, servicios correctamente prestados, pero en unos retos económicos imposibles para la mayoría de la población, pero no me estoy refiriendo a esto, sino a la dejación de una responsabilidad por parte de los Gobiernos que ahora estalla como una bomba moral en la crisis del coronavirus. La expresión de esta privatización y mercantilización de derechos en datos es la siguiente: según el IMSERSO, de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas. El sector, integrado por más de 150 gestoras de centros y servicios, alcanzó unos ingresos superiores a 3.500 millones de euros en 2016 en España, según datos de Alimarket. Tres años después, en 2019, el negocio de la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de aumentar.

Según informa la consultora DBK, el mercado de las residencias de la tercera edad lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual (“Aparcamiento de ancianos S.A.” CTXT). Para que se vea aun con mayor nitidez la

responsabilidad política en lo que ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza, dos botones de muestra:

a) En la Comunidad de Madrid, PP y Cs se han negado a apoyar una Ley reguladora de las Residencias de Tercera Edad.

b) Desde 2012 los presupuestos de dependencia se han recortado en 5.864 M€.

¿Será ese el camino que se quiere impulsar desde los compulsivos privatizadores y recortadores de impuestos? Pues, las consecuencias están claras. Y las responsabilidades, también.

Me he extendido en el ejemplo, y podríamos hacer lo mismo con muchos otros componentes sobre el Estado que hay que construir poscoronavirus, porque, a partir de ahí, se plantean los test decisivos y las preguntas fundamentales: ¿se está dispuesto a convertir la red de residencias en una red esencialmente de residencias públicas sometidas a los criterios básicos de atención a los mayores que todos los trabajadores sociales demandan, dotadas de las instalaciones y profesionales adecuados y en suficiente número? ¿Estamos dispuestos a fortalecer la red pública de residencias, invirtiendo 1.000 millones de euros en ello?

Esta será la tesis de algunas de las preguntas que nos tendremos que hacer para pasar a los hechos y a las respuestas que la sociedad espera.